

# Diario Oficial

## de la Unión Europea

# C 204

47º año

Edición  
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

12 de agosto de 2004

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	I <i>Comunicaciones</i>	
	<b>Comisión</b>	
2004/C 204/01	Tipo de cambio del euro .....	1
2004/C 204/02	Comunicación con arreglo a la letra a) del apartado 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, sobre la información facilitada por las autoridades aduaneras de los Estados miembros con respecto a la clasificación de mercancías en la nomenclatura aduanera .....	2
2004/C 204/03	Ayudas estatales — Polonia — Ayuda C 20/04 (ex NN 25/04) — Reestructuración de la empresa siderúrgica Huta Częstochowa — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE <sup>(1)</sup> .....	6
2004/C 204/04	Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas <sup>(1)</sup> .....	14



## I

(Comunicaciones)

## COMISIÓN

**Tipo de cambio del euro <sup>(1)</sup>****11 de agosto de 2004**

(2004/C 204/01)

**1 euro =**

Moneda	Tipo de cambio	Moneda	Tipo de cambio		
USD	dólar estadounidense	1,2233	LVL	lats letón	0,6605
JPY	yen japonés	135,84	MTL	lira maltesa	0,4263
DKK	corona danesa	7,4368	PLN	zloty polaco	4,4226
GBP	libra esterlina	0,66900	ROL	leu rumano	40 671
SEK	corona sueca	9,2000	SIT	tólar esloveno	240,0200
CHF	franco suizo	1,5416	SKK	corona eslovaca	40,010
ISK	corona islandesa	87,30	TRL	lira turca	1 788 200
NOK	corona noruega	8,3290	AUD	dólar australiano	1,7167
BGN	lev búlgaro	1,9559	CAD	dólar canadiense	1,6179
CYP	libra chipriota	0,57930	HKD	dólar de Hong Kong	9,5408
CZK	corona checa	31,463	NZD	dólar neozelandés	1,8754
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	2,0951
HUF	forint húngaro	247,63	KRW	won de Corea del Sur	1 411,87
LTL	litas lituana	3,4528	ZAR	rand sudafricano	7,5649

(<sup>1</sup>) Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

**Comunicación con arreglo a la letra a) del apartado 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, sobre la información facilitada por las autoridades aduaneras de los Estados miembros con respecto a la clasificación de mercancías en la nomenclatura aduanera**

(2004/C 204/02)

La información arancelaria vinculante deja de ser válida a partir del día de la fecha si llega a ser incompatible con la interpretación de la nomenclatura aduanera como consecuencia de las siguientes medidas arancelarias internacionales:

Enmiendas a las notas explicativas del sistema armonizado y compendio de dictámenes de clasificación, aprobados por el Consejo de cooperación aduanera (documento CCA NC 0796 — Informe de la 32ª sesión del Comité del SA):

**ENMIENDAS A LAS NOTAS EXPLICATIVAS QUE DEBEN HACERSE CON ARREGLO AL ARTÍCULO 8 — PROCEDIMIENTO DEL CONVENIO DEL SA Y DICTÁMENES DE CLASIFICACIÓN EDITADOS POR EL COMITÉ DEL SA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS**

**(32ª sesión del CSA – noviembre de 2003)**

**Documento NC 0796**

Enmiendas a las notas explicativas de la Nomenclatura anexa al Convenio del SA

Reglas generales para la interpretación	L/26
03.02	L/2
25.05	L/25
28.21	L/26
29.37	L/27
31.05	L/26
38.08	L/26
39.24	L/24
39.26	L/24
40.14	L/24
44.11	L/12
Sección XI General	L/5
Capítulo 69 Sub-Capítulo II. General	L/25
76.02	L/13
Capítulo 84 General	L/26
84.01	L/14
84.05	L/14
84.14	L/14
84.17	L/14
84.19	L/8
84.22	L/14
84.26	L/14
84.28	L/14
84.29	L/14
84.30	L/15

---

84.33	L/15
84.34	L/15
84.36	L/15
84.39	L/15
84.41	L/16
84.42	L/6
84.43	L/7, L/16
84.45	L/16
84.46	L/16
84.47	L/16
84.48	L/16
84.53	L/16
84.54	L/16
84.58	L/16
84.59	L/16
84.65	L/17
84.67	L/17
84.68	L/17
84.70	L/17
84.72	L/17
84.75	L/17
84.76	L/8
84.79	L/17
84.80	L/17
84.81	L/17
85.04	L/18
85.06	L/18
85.07	L/18
85.09	L/18
85.11	L/18
85.13	L/18
85.14	L/18
85.15	L/18
85.16	L/18
85.17	L/19
85.18	L/19
85.19	L/19
85.20	L/19
85.21	L/19
85.22	L/19
85.23	L/10, L/20
85.25	L/20
85.26	L/20
85.27	L/20

---

85.28	L/20
85.29	L/20
85.30	L/20
85.31	L/20
85.35	L/20
85.36	L/20
85.37	L/20
85.39	L/20
85.42	L/20
85.43	L/20
87.01	L/21
87.03	L/21
87.04	L/21
87.05	L/21
87.06	L/21
87.07	L/21
87.08	L/21
87.09	L/21
87.10	L/21
87.12	L/21
87.13	L/21
87.14	L/21
87.15	L/21
87.16	L/21
90.01	L/22
90.05	L/22
90.06	L/22
90.07	L/22
90.08	L/22
90.09	L/22
90.10	L/22
90.11	L/23
90.13	L/23
90.14	L/23
90.15	L/23
90.16	L/23
90.17	L/23
90.18	L/23
90.19	L/23

Dictámenes de clasificación aprobados por el Comité del SA

0303.79/1	L/2
3207.30/1	L/13
3302.10/1	L/3
3505.10/1 + 3505.10/2	L/4
8418.30/1	L/1
8421.29/1	L/1
8428.90/2	L/1
8462.21 o 8462.29/1	L/1
8479.89/8	L/1
8483.10/1	L/1
8512.30/1	L/1
8516.60/1	L/9
8525.30/1	L/1
8528.30/2	L/1
8535.90/1	L/28
8702.10/3	L/1
8703.10/1	L/1
9501.00/1	L/1

La información sobre el contenido de estas medidas puede obtenerse de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel) o descargarse de la página de Internet de esta Dirección General:

[http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm)

---

## AYUDAS ESTATALES — POLONIA

**Ayuda C 20/04 (ex NN 25/04) — Reestructuración de la empresa siderúrgica Huta Częstochowa  
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE**

(2004/C 204/03)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

Por carta de 19 de mayo de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Polonia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia  
Registro de Ayudas Estatales  
Rue Joseph II/Joseph II-straat 70  
B-1000 Bruselas  
Fax (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Polonia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

## RESUMEN

## I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA

- Huta Częstochowa SA (en lo sucesivo, «HCz») es la segunda empresa siderúrgica de Polonia. Es propiedad al 100 % del Ministerio de Hacienda polaco y tiene graves problemas financieros. Al no poder satisfacer el servicio de su deuda (unos 1 330 millones de zlotys polacos, PLN), la mayor parte de sus activos, incluidos todos los activos siderúrgicos, se hipotecó a sus principales acreedores, especialmente a organismos públicos.
- Para evitar la liquidación de HCz, primero se procedió a un convenio de acreedores y se formó una nueva entidad empresarial, Huta Stali Czestochowa Sp z.o.o. (en lo sucesivo, «HSCz»), para continuar la producción siderúrgica de HCz. La nueva empresa tomó en arriendo del síndico de la quiebra las instalaciones de producción de HCz y contrató a la mayor parte de sus empleados. Además, para garantizar el pago de las facturas de electricidad, el holding público del que depende HSCz emitió garantías.
- Posteriormente, el Gobierno polaco decidió «reestructurar la empresa mediante liquidación» como prevé el punto 5.4 del plan nacional, ya que la empresa necesitaría demasiada ayuda para ser viable.
- No obstante, unos meses después la Agencia Polaca de Desarrollo Industrial elaboró un plan de reestructuración para evitar el procedimiento de liquidación. El Plan se basa en la Ley de Ayudas Estatales para Empresas de gran importancia para el mercado laboral de octubre de 2002, modificada en noviembre de 2003, y concede a las

empresas protección de quiebra contra la liquidación durante la reestructuración hasta que ésta haya sido ultimada o finalizada.

- Esta Ley prevé que una empresa pública, el denominado Operador, asuma la responsabilidad de las deudas de los acreedores públicos. A cambio de activos, que no están relacionados con la producción (siderúrgica) y que tendrán un valor, como mínimo, del 25 % de la deuda total, el Operador liberará todos las hipotecas públicas sobre los activos de producción.
- Una vez libres los activos (siderúrgicos) de las garantías subsidiarias de los acreedores públicos, los acreedores comerciales pueden tomar posesión de los activos cambiando su deuda por participaciones de una empresa recién creada (MH), que es la propietaria de las instalaciones (siderúrgicas) de HCz. A finales de marzo de 2004 se llegó a un acuerdo preliminar con un inversor estratégico (LNM).

## II. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

- El Protocolo nº 8 del Tratado de adhesión sobre la reestructuración de la industria siderúrgica polaca<sup>(1)</sup> prohíbe conceder ayudas a la reestructuración a HCz. Para ello, el punto 18 del Protocolo nº 8 otorga competencias a la Comisión para adoptar las medidas adecuadas con el fin de exigir a las empresas afectadas que reembolsen las ayudas concedidas. Por consiguiente, si resultara que se hubiera concedido ayuda adicional a HCz, la Comisión podría iniciar el procedimiento investigación formal previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

(<sup>1</sup>) DO L 236 de 23.9.2003, p. 948.

8. La duda principal de la Comisión es si se hubiera conseguido la anulación de las deudas con las autoridades públicas en condiciones normales de mercado. Según reiterada jurisprudencia, un acreedor privado trataría de recuperar inmediatamente las cantidades que le adeuda un deudor con problemas financieros<sup>(2)</sup>. Por consiguiente, cuando un deudor con problemas financieros propone reprogramar la deuda para evitar la liquidación, cualquier acreedor debe sopesar las ventajas de obtener la cantidad ofrecida por el plan de reestructuración y la cantidad que podría obtener en el procedimiento de liquidación.
9. En el presente asunto, parece dudoso que un acreedor privado en la situación de los acreedores públicos hubiera aceptado reestructurar la empresa. De hecho, las autoridades polacas en principio optaron por liquidar la empresa porque concluyeron que necesitaría demasiada ayuda estatal para poder ser viable. Este argumento parece seguir siendo válido desde el punto de vista del Estado por lo que se refiere a sus deudas con arreglo al Derecho público. Aunque algunas empresas públicas con deudas en materia mercantil no tienen garantías subsidiarias, todas las deudas con arreglo al Derecho público gozan de las garantías adecuadas y el pago respectivo recibido por una liquidación es muy superior al previsto en la reestructuración.
10. La Comisión tiene sus dudas sobre el argumento de las autoridades polacas, según el cual todas las deudas públicas deberían considerarse colectivamente.
11. Además, la Comisión no está convencida de que los acreedores públicos obtengan el pago señalado por las autoridades polacas. La Comisión duda de que un acreedor privado en la situación de los acreedores públicos con deudas públicas aceptara la proposición de una cartera de activos no siderúrgicos, ya que no se seguro que estos activos pudieran convertirse en efectivo. Por el contrario, si los acreedores utilizaran sus garantías subsidiarias sobre los activos siderúrgicos, podrían convertirse en efectivo en un espacio de tiempo relativamente corto, ya los activos siderúrgicos tienen un valor comercial real como empresa en actividad.
12. Basándose en la información de que dispone la Comisión, el comportamiento de los acreedores públicos no parece ser el mismo que el de un acreedor privado. Además, tampoco está claro por qué se arrendaron a HSCz los activos de HCz, puesto que el síndico de la quiebra o los acreedores podrían haberlos gestionado ellos mismos. Por otra parte, es dudoso que un inversor privado hubiera concedido garantías para el funcionamiento de HCz dados los problemas financieros de la empresa.
13. Además, a la vista de la letra a) del punto 4 del Protocolo nº 8, la Comisión duda de que LNM tuviera derecho a adquirir las participaciones de MH y HCz, ya que no se descarta que hubiera podido recibir ayuda estatal a través de la empresa siderúrgica polaca Polskie Huty Stali SA, adquirida por LNM anteriormente.

#### TEXTO DE LA CARTA

«Komisja pragnie poinformować Polskę, że po dokonaniu analizy informacji dostarczonych przez władze polskie w sprawie wyżej wymienionej pomocy państwa podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w rozumieniu art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

<sup>(2)</sup> Asunto C-342/96, España contra Comisión, apartado 46; asunto T-152/99, Hamsa, apartado 167.

#### I. PROCEDURA

1. W piśmie z 4 sierpnia 2003 r. Komisja zwróciła się z prośbą o różnego rodzaju informacje dotyczące kontroli pomocy państwa w Polsce, w tym ewentualnej pomocy na rzecz restrukturyzacji Huty Częstochowa SA (dalej zwanej "HCz"). Polska udzieliła odpowiedzi pismem z 16 września 2003 r.
2. Dnia 5 września 2003 r. i 1 października 2003 r. kwestia ta była omawiana podczas spotkania technicznego pomiędzy służbami Komisji a władzami polskimi, dotyczącego spraw związanych ze stalą. W piśmie z 8 października 2003 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje na temat nowej struktury HCz. W piśmie z 17 listopada 2003 r. Komisja przypomniała Polsce, że nie udzielono odpowiedzi na poprzednią prośbę. Polska odpowiedziała pismami z 18 i 27 listopada 2003 r. Ponadto, w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną 8 grudnia 2003 r., Komisja otrzymała kopię planu restrukturyzacji (dalej zwanego "pierwszym planem"). W liście z 8 grudnia 2003 r. Komisja zwróciła się do Polski z prośbą o dodatkowe informacje na temat kontroli pomocy państwa w Polsce. Polska odpowiedziała pismem z 20 stycznia 2004 r.
3. Konsultant odpowiedzialny za monitorowanie programu restrukturyzacji w Polsce dokonał oceny pierwszego planu dla HCz i 23 stycznia 2004 r. przedłożył Komisji wnioski, z których wynika, że nie można wykluczyć udzielenia pomocy państwa.
4. W piśmie przesłanym 29 stycznia 2004 r. Komisja zwróciła się do Polski z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji w terminie do 20 lutego 2004 r., aby uniknąć ewentualnego wszczęcia procedury na podstawie informacji znajdujących się w aktach. Polska udzieliła odpowiedzi pismem z 23 lutego 2004 r., które Komisja otrzymała 27 lutego 2004. Pismem z 24 marca 2004 r. przesłanym do polskiej Minister ds. Europejskich Komisja przypomniała o swoim zobowiązaniu do wszczęcia postępowania, w przypadku jeżeli nie zostaną wyjaśnione wątpliwości dotyczące pomocy państwa. Dnia 5 kwietnia 2003 r. Komisja otrzymała drogą elektroniczną zmodyfikowaną wersję planu restrukturyzacji (zwanego dalej "drugim planem"), opatrzonego datą 31 marca 2004 r. W związku z powyższym dnia 8 kwietnia 2004 r. miało miejsce kolejne spotkanie między Komisją a władzami polskimi.

#### II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY

5. HCz jest drugim co do wielkości producentem stali w Polsce. W skład HCz wchodzi stosunkowo nowoczesna stalownia i walcownia blach grubych, w której znajdują się elektryczny piec, urządzenie do odlewania o działaniu ciągłym oraz walcarka do blach grubych z narzędziami wykończającymi. Nominalna zdolność produkcyjna stalowni (produkcującej półwyroby, tj. kęsiska płaskie) wynosi 700 000 ton, a walcowni (przetwarzającej półwyroby na wyroby gotowe) – około 1 000 000 ton. Oprócz tego HCz jest właścicielem 14 spółek zależnych, które dostarczają jej dodatkowych usług.



6. HCz należy w 100 % do polskiego Ministerstwa Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 370 mln PLN (około 70 mln EUR, po kursie 1 EUR = około 4.75 PLN). Na podstawie dostępnych obecnie informacji jest prawdopodobne, że HCz mogła otrzymać różnorodną pomoc państwa od momentu rozpoczęcia procesu restrukturyzacji w 1997 roku.
7. Zgodnie z drugim planem, na dzień 30 czerwca 2003 r. wartość księgowa aktywów spółki wynosiła 723,5 mln PLN (około 150 mln EUR). W roku 2001 obroty spółki wyniosły 956 mln zł (około 200 mln EUR), a stan zatrudnienia – około 5 000 pracowników (HCz zatrudnia bezpośrednio około 2 300 osób).
8. HCz znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Ponieważ nie była w stanie dokonać obsługi swojego długu (który, według danych zawartych w pierwszym i drugim planie, wynosił w 2003 r. około [1] <sup>(3)</sup> mld PLN, czyli około [...] <sup>(4)</sup> mln EUR), przeważająca część składników jej majątku, w skład której wchodzi wszystkie aktywa stalowe, jest objęta zastawem na rzecz głównych wierzycieli, wśród których znajdują się instytucje publiczne. Drugi plan wymienia następujących wierzycieli:
9. W skład pierwszej grupy wchodzi zobowiązania na rzecz sektora publicznego:
- składki na ubezpieczenie społeczne (dalej zwane "ZUS", roszczenia wynoszą prawie [...] <sup>(5)</sup> mln PLN ([...] <sup>(6)</sup> mln),
  - podatek od nieruchomości (w wysokości [...] <sup>(7)</sup> mln PLN, na rzecz gminy miejskiej),
  - opłata środowiskowa ([...] <sup>(8)</sup> mln PLN),
  - pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ([...] <sup>(9)</sup> PLN),
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ([...] <sup>(10)</sup> mln),
  - Urząd Miasta Częstochowy ([...] <sup>(11)</sup> mln PLN) oraz
  - VAT i inne podatki (urząd skarbowy – [...] <sup>(12)</sup> mln PLN).
10. W skład drugiej grupy wchodzi zobowiązania cywilnoprawne, w ramach których można następnie wyróżnić zobowiązania wobec wierzycieli publicznych i prywatnych. Do pierwszej podgrupy (dalej zwanej: "wierzyciele publiczni posiadający zobowiązania cywilnoprawne") należą:
- Polskie Sieci Energetyczne SA ([...] <sup>(13)</sup> mln PLN),
  - Zakład Energetyczny Częstochowa SA ([...] <sup>(14)</sup> mln PLN),
  - Agencja Rozwoju Przemysłu SA (dalej zwana "ARP", [...] <sup>(15)</sup> mln PLN),
  - PKP Dyrekcja Generalna SA ([...] <sup>(16)</sup> mln PLN),
  - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ([...] <sup>(17)</sup> mln PLN),
  - Centrala Zbytu Węgla "Węglózbyt" SA ([...] <sup>(18)</sup> mln PLN), oraz
  - Kompania Węglowa sp. z o.o. ([...] <sup>(19)</sup> mln PLN).
11. Do drugiej podgrupy, a równocześnie trzeciej grupy, należą następujący wierzyciele prywatni:
- [...] <sup>(20)</sup> mln PLN),
  - [...] <sup>(21)</sup> mln PLN),
  - [...] <sup>(22)</sup> mln PLN),
  - [...] <sup>(23)</sup> mln PLN),
  - [...] <sup>(24)</sup> mln PLN), oraz
  - [...] <sup>(25)</sup> mln PLN).
12. Komisja została również poinformowana o tym, że objęte zabezpieczeniem zostały wyłącznie zobowiązania publiczne wobec wierzycieli publicznych oraz zobowiązania cywilnoprawne wobec wierzycieli prywatnych, natomiast wierzyciele publiczni posiadający wierzycielności handlowe nie korzystają z zabezpieczeń. Wynika to z faktu, iż polski Skarb Państwa takich zabezpieczeń nie wymagał. W drugim planie Polska stwierdza zatem, że w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego HCz wierzyciele publiczni posiadający wierzycielności publicznoprawne otrzymaliby spłatę 83,8 % należności (z czego około 90 % otrzymaliby główni wierzyciele, ZUS oraz Urząd Miasta Częstochowa), natomiast wierzyciele publiczni posiadający wierzycielności cywilnoprawne otrzymaliby zaledwie 18,6 %. Ogółem, w wyniku postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele należący do sektora publicznego otrzymaliby średnio spłatę w wysokości 52,5 % <sup>(26)</sup> należności. Natomiast wierzyciele prywatni otrzymaliby spłatę 52,8 % swoich należności ([...] <sup>(27)</sup> otrzymałby 76 %, a [...] <sup>(28)</sup> ponad 90 %, zaś pozostali – 40 % lub mniej).

<sup>(3)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(4)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(5)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(6)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(7)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(8)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(9)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(10)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(11)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(12)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(13)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(14)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(15)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(16)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(17)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(18)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(19)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(20)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(21)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(22)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(23)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(24)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(25)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(26)</sup> Zgodnie z drugim planem restrukturyzacja zobowiązań wobec sektora publicznego doprowadziłaby do spłaty 72,6 % (ZUS 77 %, pozostali 63 %), a restrukturyzacja zobowiązań handlowych – do spłaty 39 %; ogółem 56,5 %.<sup>(27)</sup> Objęte tajemnicą służbową.<sup>(28)</sup> Objęte tajemnicą służbową.

13. Z powodu zadłużenia 17 października 2002 r. HCz przeszła pod zarządek syndyka. Zarząd spółki zwrócił się z wnioskiem o otwarcie sądowego postępowania układowego z wierzycielami. Wymienione postępowanie wydaje się powodować odroczenie spłaty długów, a jego warunkiem jest przedłożenie planu restrukturyzacji. Zgodnie z informacjami udostępnionymi Komisji procedura ta została zakończona 18 grudnia 2003 r. na skutek umorzenia postępowania.
14. W celu utrzymania ciągłości produkcji Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (dalej zwane "TFS", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której większość posiada polski Skarb Państwa, działająca w branży produktów stalowych) ustanowiło nowy podmiot gospodarczy – Hutę Stali Częstochowa Sp. z o.o. (dalej zwaną "HSCz"). Nowy podmiot wydzierżawił od syndyka urządzenie do produkcji stali HCz (w tym stalownię, walcownię blach grubych, koksownię i niektóre podstawowe usługi) na sumę 335 mln PLN i zobowiązał się, w umowie dzierżawy, przejąć większość pracowników HCz.
15. Nie jest jasne, w jaki sposób i od kogo HSCz otrzymała kapitał operacyjny oraz kiedy i w jaki sposób dokonano opłat za dzierżawę. Uzyskano jedynie potwierdzenie, że w celu dokonania opłat za energię na rzecz PSE TFS udzieliło trzech gwarancji w listopadzie i grudniu 2003 r.
16. Polski Rząd podjął decyzję, co zostało przedstawione w "Programie restrukturyzacji i rozwoju hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2006 r.", przyjętym przez polską Radę Ministrów dnia 25 marca 2003 r. (dalej zwanego "Krajowym Programem Restrukturyzacji"), że «do przeprowadzenia restrukturyzacji HCz konieczne byłoby udzielenie jej pomocy publicznej w wysokości 1 mld zł [...]. Wobec powyższego zakłada się, że HCz zostanie zrestrukturyzowana przez upadłość» (punkt 5.4).
17. Niemniej jednak 21 stycznia 2003 r. HCz wraz z ARP zwróciła się z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dnia 2 lipca 2003 r. ARP, organ odpowiedzialny za nadzór nad procesem restrukturyzacji, opracował plan restrukturyzacji w celu uniknięcia postępowania likwidacyjnego. Plan jest oparty na Ustawie o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy z października 2002 r., zmienionej w listopadzie 2003 r. <sup>(29)</sup> (dalej zwanej "Ustawą"), która jest jedną z dwóch ustaw włączonych do tzw. pakietu antykrzysowego. W rozumieniu Komisji Ustawa chroni spółki przed upadłością w trakcie restrukturyzacji oraz do chwili przeprowadzenia lub zakończenia restrukturyzacji <sup>(30)</sup>.
18. Ponadto, w rozumieniu Komisji, Ustawa przewiduje, że filia ARP, nazywana Operatorem, przyjmuje odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli publicznych. W zamian za aktywa, które nie są związane z produkcją i których wartość wynosi przynajmniej 25 % długu całkowitego, Operator zwolni wszystkie zastawy na aktywach produkcyjnych, nawet wówczas, gdy aktywa objęte zastawem mają wartość wyższą niż aktywa objęte zastawem.
19. W odniesieniu do HCz oznacza to, że Operator, w zamian za zwolnienie wszystkich zastawów wierzycieli publicznych na aktywach stalowych wynikających ze zobowiązań wobec wierzycieli publicznych, przenieś składniki majątku HCz nie związane z produkcją stali. W skład tego majątku wchodzi grunty, których część stanowić będzie park maszynowy oraz akcje firmy energetycznej o nazwie Elsen. Zgodnie z drugim planem umorzone mają zostać wierzycielności publiczne, które narosły do 30 czerwca 2003 r. i wynoszą ogółem [...] <sup>(31)</sup> mln PLN. Stwierdzona wartość księgowa netto otrzymanych w zamian aktywów wynosi około [...] <sup>(32)</sup> mln PLN (wartość rynkową określa się na około 223 mln PLN), co stanowi około 62 % zobowiązań. W związku z tym przynajmniej 38 % zobowiązań ma zostać umorzonych <sup>(33)</sup>. Następnie, z upływem czasu, Operator będzie próbował uzyskać jak największą ilość gotówki z tych aktywów. Przyjmuje się, że potrwa to przynajmniej kilka lat.
20. Po "uwolnieniu" stalowych aktywów produkcyjnych od zastawu na rzecz pierwszej grupy wierzycieli publicznych wierzyciele posiadający wierzycielności cywilnoprawne mogą wejść w posiadanie aktywów związanych z produkcją stali. Ma się to odbyć w drodze konwersji wierzycielności (około [...] <sup>(34)</sup> mln PLN <sup>(35)</sup>) na udziały w nowo powstałej filii HCz, Majątek Hutniczy Sp. z o.o. (dalej zwanej "MH"). MH byłby właścicielem urządzeń do produkcji stali HCz, na które składa się pełne wyposażenie stalowni, walcowni blach grubych oraz budynek administracyjny. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w drugim planie wartość stalowych aktywów produkcyjnych wynosi [...] <sup>(36)</sup> mln PLN <sup>(37)</sup>, co oznacza, że posiadacze wierzycielności cywilnoprawnych musieliby umorzyć 60 % długu.
21. Dnia 13 października 2003 r. HCz podpisała układ ze swoimi wierzycielami komercyjnymi. Komisja rozumie, że Ustawa nakłada obowiązek takiego układu na wszystkich wierzycieli prywatnych, w przypadku gdy zgodę wyraża ponad 50 % wierzycieli prywatnych. Z informacji przekazanych Komisji wynika, że zgodę wyraziło zaledwie 55 % wierzycieli, wśród których znalazło się dziesięciu największych wierzycieli, wobec których HCz posiadała zobowiązania handlowe. Wierzyciele uzyskają około 73 % udziałów w MH za około 40 % swoich zobowiązań (Komisja rozumie, że pozostałe 27 % pozostanie w HCz w celu opłacenia najnowszych długów). W związku z tym będą oni musieli umorzyć około 60 % swoich wierzycielności. Nabycie udziałów w MH przez wierzycieli nastąpi dopiero po uwolnieniu aktywów MH od zastawu nałożonego przez wierzycieli reprezentujących sektor publiczny.

<sup>(31)</sup> Objęte tajemnicą służbową.

<sup>(32)</sup> Objęte tajemnicą służbową.

<sup>(33)</sup> Zgodnie z pierwszym planem wierzyciele publiczni mieli możliwość umorzenia pomiędzy 42 % a 73 % niespłaconego długu.

<sup>(34)</sup> Objęte tajemnicą służbową.

<sup>(35)</sup> Kwota podana w pierwszym planie wynosiła 845 mln PLN.

<sup>(36)</sup> Objęte tajemnicą służbową.

<sup>(37)</sup> Pierwszy plan zakładał, że wartość stalowych aktywów produkcyjnych jest równa wartości aktualnej dzierżawy w wysokości 335 mln PLN.

22. Polska zamierza sprzedać udziały MH oraz udziały HSCz inwestorowi strategicznemu. W wyniku pierwszej procedury przetargowej koncern LNM N.V. (dalej zwany "LNM") został wybrany przez polskie Ministerstwo Skarbu Państwa jako preferowany oferent i otrzymał wyłączność na negocjacje. Wstępna umowa została parafowana 31 marca 2004 r. <sup>(38)</sup> Komisja została poinformowana, że umowa musi zostać zaakceptowana przez UE zanim procedura zostanie zamknięta. Komisja rozumie, że polski Skarb Państwa, jako główny akcjonariusz HSCz oraz akcjonariusz MH, uzależnił wyrażenie zgody na sprzedaż akcji od zgody UE w ramach postępowania związanego z pomocą państwa dla HCz. Komisja otrzymała tymczasem wiadomość, że przetarg został unieważniony.

23. Na koniec, pozostałe składniki majątku HCz spółek zależnych świadczących usługi oraz pozostałe aktywa dzierżawione przez HSCz, czyli koksownia oraz główni usługodawcy, przejdą do innej filii HCz, noszącej nazwę Majątek Hutniczy Plus. Spółka ta zostanie, wraz z pozostałymi gruntami znajdującymi się w posiadaniu HCz, przekazana do nowej spółki akcyjnej Regionalny Fundusz Inwestycyjny (dalej zwany "funduszem").

24. Zgodnie z oceną zawartą w drugim planie wartość księgową składników majątku funduszu będzie wynosić 159 mln PLN. Zadaniem funduszu będzie spłata zobowiązań wobec pracowników (20 mln PLN) oraz obsługa długu niepodlegającego restrukturyzacji i wynikającego ze zobowiązań publicznoprawnych po 30 czerwca 2002 r. (117,5 mln PLN, w tym składki na ubezpieczenie społeczne oraz na opiekę zdrowotną).

### III. STANOWISKO POLSKI

25. Polska poinformowała Komisję, że decyzja o restrukturyzacji HCz znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, że, ze względu na długotrwały i kosztowny charakter postępowania upadłościowego, planowana "kreatywna restrukturyzacja" będzie bardziej opłacalna dla wierzycieli i pozwoli utrzymać dużą liczbę miejsc pracy.

26. Polska przedłożyła opinię prezesa polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów <sup>(39)</sup> na temat obranego kierunku koncepcji restrukturyzacji, która to opinia była ogólnie pozytywna, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi testu inwestora prywatnego. Miałoby to miejsce w przypadku, gdyby koncepcja restrukturyzacji, między innymi, "doprowadziła do wypracowania maksymalnej ilości środków pieniężnych, które pozwolą na zaspokojenie wierzytelności publicznoprawnych w określonym terminie, w stopniu porównywalnym do zaspokojenia wierzytelności cywilnoprawnych".

27. Po tym jak Komisja zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje określające szczegółowo, dlaczego wierzyciel

prywatny, znajdujący się w sytuacji wierzycieli publicznych, miałby zaakceptować restrukturyzację HCz, Polska utrzymywała, że plan spełnia wymogi testu inwestora prywatnego, ponieważ wierzyciele prywatni i publiczni są zasadniczo traktowani w równy sposób.

28. Na koniec, wraz z drugim planem Polska przedłożyła szczegółową analizę różnic w spłatach zobowiązań w przypadku upadłości i restrukturyzacji. Aktualnie Polska twierdzi, że w przypadku upadłości HCz wierzyciele publiczni otrzymaliby spłatę zaledwie 52,5 % należności, natomiast restrukturyzacja przyniosłaby im 56,5 % spłatę. W każdym przypadku byłby to wynik lepszy niż wynik wierzycieli prywatnych, którzy mieliby otrzymać spłatę należności wynoszącą zaledwie 40,3 % w przypadku restrukturyzacji, a 37,2 % w przypadku upadłości.

### IV. OCENA POMOCY

29. Protokół nr 8 do Traktatu o Przystąpieniu "W sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali" <sup>(40)</sup> (zwany dalej "Protokołem nr 8") dopuszcza udzielanie pomocy państwa dla celów restrukturyzacji polskiego sektora hutnictwa stali w związku z jego restrukturyzacją w okresie 1997–2006 w wysokości maksymalnie 863 mln EUR (3 387 mln PLN). Protokół uzależnia fakt otrzymania pomocy państwa od spełnienia kilku warunków, między innymi przywrócenia rentowności oraz zobowiązania do obniżenia zdolności produkcyjnych.

30. Niemniej jednak, zgodnie z punktem 3 Protokołu nr 8, pomoc państwa na cele restrukturyzacji może zostać udzielona wyłącznie spółkom wymienionym w załączniku 1. Polska wybrała 8 spółek, które zostały umieszczone na liście. Ani HCz, ani jej filie nie figurują na liście spółek objętych pomocą. W rzeczywistości HCz została usunięta z listy, ponieważ Polska oceniła, że na przywrócenie rentowności spółki potrzebna byłaby pomoc państwa w wysokości 1 mld zł i podjęła decyzję o restrukturyzacji w drodze postępowania upadłościowego.

31. Punkt 6 akapit trzeci Protokołu nr 8 zabrania udzielania jakiegokolwiek dodatkowej pomocy państwa na cele restrukturyzacji polskiego sektora hutnictwa stali. W związku z tym w przypadku, gdy proces monitorowania restrukturyzacji wykaże, że wymienione warunki nie zostały spełnione, ponieważ udzielona została "dodatkowa niezgodna pomoc państwa na rzecz hutnictwa", punkt 18 Protokołu nr 8 daje Komisji uprawnienia do podjęcia "odpowiednich środków, na mocy których każda spółka będzie zobowiązana do zwrotu pomocy otrzymanej" <sup>(41)</sup>. To postanowienie daje Komisji możliwość wszczęcia formalnej procedury dochodzenia, jako że w przypadku braku szczegółowych postanowień protokołu nr 8 zastosowanie mają zasady ogólne <sup>(42)</sup>.

<sup>(40)</sup> Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 948.

<sup>(41)</sup> Punkt 18 stanowi: «Jeżeli proces monitorowania wykaże, iż: [...] Polska, w trakcie okresu restrukturyzacji udzieliła dodatkowej niezgodnej pomocy państwa na rzecz hutnictwa i spółek objętych pomocą w szczególności, [...] Komisja podejmie odpowiednie środki, na mocy których każda spółka będzie zobowiązana do zwrotu pomocy otrzymanej z naruszeniem warunków ustanowionych w niniejszym Protokole».

<sup>(42)</sup> Zobacz również punkt 1 Protokołu nr 8, którego brzmienie jest następujące: «nie naruszając postanowień artykułu 87 i 88 Traktatu WE ...».

<sup>(38)</sup> Patrz: <http://www.ispat.com/news/en/2004-March-HCzInitialling-FINAL.pdf>

<sup>(39)</sup> Stanowisko UOKiK z dnia 25.7.2003.

32. W związku z tym, że proces monitorowania wykazuje istnienie podstaw pozwalających przypuszczać, że została udzielona pomoc państwa poza pomocą dozwoloną w ramach Protokołu nr 8, Komisja może wszcząć formalną procedurę dochodzenia przewidzianą w art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Procedura ta powinna dotyczyć wszelkiej pomocy udzielonej HCz od 1 stycznia 1997. Zastosowanie ma również rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93<sup>(43)</sup>.
33. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc państwa, czyli wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu środków publicznych w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Artykuł 86 ust. 1 Traktatu WE precyzuje, że art. 87 Traktatu WE ma zastosowanie również do przedsiębiorstw publicznych, tj. do przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo.
34. Blacha stalowa gruba jest produktem wykorzystywanym w przemyśle stoczniowym i przedmiotem szeroko rozwiniętej wymiany handlowej w całej Europie. Wszelka tego rodzaju pomoc udzielona przez Polskę mogłaby zatem zakłócać konkurencję, sprzyjając niektórym przedsiębiorstwom, oraz wpływać na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
35. HCz uzyskuje dzięki działaniom Polski przewagę konkurencyjną, jako że umorzenie jej długów przez polskie władze stanowi utracone dochody wierzycieli publicznych. Niemniej jednak, zgodnie z tradycyjnym orzecznictwem, środki publiczne stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu WE jedynie wówczas, gdy otrzymujące je przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę konkurencyjną, której nie uzyskałoby w normalnych warunkach rynkowych. W rzeczywistości ustalono, że prywatny inwestor może realizować politykę strukturalną, w ramach której kieruje się długoterminowymi perspektywami rentowności zainwestowanego kapitału. Jednak, z drugiej strony, jak wynika z istniejącego orzecznictwa, prywatny inwestor starałby się raczej uzyskać spłatę sum zaległych od dłużnika znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej w rozsądnym przedziale czasu<sup>(44)</sup>.
36. Dlatego też, jeżeli dłużnik znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej proponuje restrukturyzację długu w celu uniknięcia likwidacji, każdy wierzyciel musi dokładnie porównać sumę proponowaną w ramach planu restrukturyzacji i sumę możliwą do uzyskania w drodze postępowania upadłościowego. Na jego decyzje wpływa wiele
- czynników wynikających z natury posiadanych zabezpieczeń, w szczególności fakt, czy wierzyciel posiada hipoteki, czy tylko niezabezpieczone roszczenia, które są bezwartościowe, ponieważ roszczenia zabezpieczone pochłoną wszystkie pozostałe zasoby<sup>(45)</sup>. Komisja ma wątpliwości co do poprawności łącznej wyceny zobowiązań wobec podmiotów publicznych.
37. Aktualny plan restrukturyzacji rodzi poważne wątpliwości co do tego, czy przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc – HCz – byłoby w stanie uzyskać restrukturyzację długu oraz jego umorzenie na normalnych warunkach rynkowych.
38. Po pierwsze, wydaje się wątpliwe, by znajdując się w sytuacji wierzycieli publicznych, prywatny wierzyciel w ogóle zgodził się na restrukturyzację spółki. W rzeczywistości polskie władze początkowo skłaniały się ku przeprowadzeniu postępowania upadłościowego wobec spółki, dochodząc do wniosku, że przywrócenie jej rentowności wymagałoby udzielenia zbyt znaczącej pomocy państwa.
39. Wydaje się, że rozumowanie to ma nadal zastosowanie z punktu widzenia państwa w odniesieniu do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, ponieważ są one dobrze zabezpieczone, a stopień ich spłaty, w przypadku postępowania upadłościowego, jest dużo wyższy niż w przypadku restrukturyzacji. Aktualnie Komisja nie może przyjąć argumentu Polski, zgodnie z którym łączna wycena wszystkich wierzytelności publicznych, czyli obejmujących zobowiązania wobec państwa oraz zobowiązania cywilnoprawne wobec przedsiębiorstw publicznych, mogłaby wskazywać na fakt, że restrukturyzacja jest dla państwa rozwiązaniem lepszym niż upadłość spółki. Ponadto, Komisja nie ma pewności co do tego, czy fakt, że spółki państwowe świadczyły usługi na rzecz spółki znajdującej się w trudnej sytuacji, nie poszukując zabezpieczenia na swoje należności, nie stanowi sam w sobie pomocy państwa.
40. Po drugie, Komisja nie jest przekonana, że spłacone zostaną należności wszystkich wierzycieli publicznych, tak jak to przedstawiają polskie władze. Komisja ma wątpliwości co do tego, czy wierzyciel prywatny w sytuacji wierzycieli publicznych, posiadający wierzytelności publicznoprawne, byłby gotów zaakceptować różnorodne aktywa inne niż stalowe, nie jest bowiem jasne, czy i kiedy aktywa te można będzie wymienić na gotówkę. Z drugiej strony, Komisja ma wrażenie, na podstawie danych przedstawionych w pierwszym planie restrukturyzacji, że większość zobowiązań publicznych jest zabezpieczona na aktywach związanych z produkcją stali. Aktywa te można wymienić na gotówkę w stosunkowo krótkim okresie, ponieważ biorąc pod uwagę zainteresowanie ze strony kilku międzynarodowych koncernów stalowych, aktywa stalowe mają realną wartość handlową jako wartość firmy w trakcie prowadzenia działalności.

<sup>(43)</sup> Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

<sup>(44)</sup> Sprawa C-342/96 Hiszpania v Komisja, paragraf 46; Sprawa 256/97 DMT, paragraf 24; Opinia Rzecznika Generalnego w Sprawie 256/97 DMT, paragraf 38; Sprawa T-152/99 Hamsa, paragraf 167.

<sup>(45)</sup> Sprawa T-152/99 Hamsa, paragraf 168.

41. Jedynym zasadnym wyjaśnieniem zachowania wierzycieli publicznych wydaje się być Ustawa (o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy), która zobowiązuje wierzycieli publicznych do zwolnienia zastawu z aktywów stalowych. Obowiązek ten nałożony jest na wierzycieli publicznych i na obecnym etapie postępowania Komisja uważa, że to zachowanie nie jest zgodne z zasadą inwestora prywatnego.
42. Ponadto nie jest jasne, dlaczego aktywa HCz zostały oddane HSCz w dzierżawę. W zasadzie wierzyciele publiczni lub zarządca mogli nadal samodzielnie obsługiwać aktywa stalowe, jeżeli miałyby to być korzystne dla wierzycieli i mogłoby pozwolić na dokonanie sprzedaży składników majątku wolnych od jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dzierżawy.
43. Poza tym, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki, wątpliwe jest również, czy inwestor prywatny udzieliłby gwarancji, tak jak to uczyniło TFS dla HCz/HSCz<sup>(46)</sup>. Istnieją zatem wątpliwości co do tego, czy działalność HSCz odbywała się bez pomocy państwa.
44. Istnieją również poważne wątpliwości co do tego, czy w normalnych warunkach rynkowych mogłoby dojść do umorzenia długu publicznego, do podpisania umowy dzierżawy z HSCz oraz udzielenia gwarancji dla HCz/HSCz. Może to zatem stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.
45. Jest oczywiste, że HCz i HSCz zajmują się produkcją stali. Blacha stalowa gruba (i kęsiska płaskie) to produkty stalowe w rozumieniu załącznika 1 do Traktatu EWWiS oraz załącznika B do Komunikatu Komisji w sprawie wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych<sup>(47)</sup>.
46. W związku z powyższym, beneficjentem opisywanej pomocy jest producent stali. W rzeczywistości restrukturyzacja długu odbywa się poprzez restrukturyzację spółki HCz, przy zgodzie wierzycieli publicznych na zwolnienie zastawu w zamian za uzyskanie kontroli nad składnikami majątku innymi niż stalowe. Restrukturyzacja długu odbywa się na korzyść HCz, która w przeciwnym wypadku zostałaby postawiona w stan upadłości<sup>(48)</sup>. W dodatku HSCz może obsługiwać aktywa stalowe tylko dlatego, że HCz nie została zlikwidowana.
47. Na podstawie informacji, jakimi dysponuje Komisja, zachowanie wierzycieli publicznych nie wydaje się być zachowaniem wierzyciela prywatnego. W związku z tym istnieją wystarczające podstawy, by podejrzewać, że mogła zostać udzielona dodatkowa pomoc państwa na restrukturyzację sektora hutnictwa stali z naruszeniem warunków ustanowionych w Protokole nr 8.
48. Tego rodzaju pomoc państwa byłaby niezgodna ze wspólnym rynkiem, ponieważ punkt 6 akapit 3 Protokołu nr 8 zabrania jakiegokolwiek pomocy na cele restrukturyzacji dla polskiego przemysłu stalowego, innej niż ta wyraźnie określona w punkcie 3<sup>(49)</sup>.
49. Ponadto, jeżeli w stosunku do HCz nie zostanie przeprowadzone postępowanie upadłościowe, jak to zostało przedstawione w KPR, Komisja wątpi, czy takie zaniechanie jest zgodne z punktem 1 drugi akapit i punktem 6 Protokołu nr 8, jeżeli nie osiągnięto porozumienia w odniesieniu do zmiany KPR na mocy punktu 10 Protokołu nr 8.
50. Na koniec, w świetle punktu 4 lit. a) Protokołu nr 8 i ze względu na brak jakichkolwiek szczegółowych informacji w sprawie nabycia udziałów MH i HSCz, Komisja ma wątpliwości, czy LNM będzie miał prawo do ich nabycia, dopóki nie zostanie wykluczone, że żadna pomoc państwa nie zostanie przekazana przez polskiego producenta stali Polskie Huty Stali SA, które zostały wcześniej nabyte przez LNM<sup>(50)</sup>.

## V. WNIOSKI

51. Niniejszą decyzję uważa się za decyzję o wszczęciu formalnej procedury dochodzenia w rozumieniu art. 88 ust. 2 Traktatu WE i rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999. Komisja, działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, zwraca się do Polski z prośbą o przedstawienie swoich uwag i dostarczenie wszelkich informacji, które mogłyby być użyteczne do celów oceny pomocy, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszego pisma. W szczególności informacje powinny zawierać:
- Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wielkości i celów wszelkich środków pomocy państwa udzielonych przez Polskę na rzecz HCz od 1997 roku.
  - Wyjaśnienie dotyczące aktualnego działania HSCz, sposobu finansowania działalności bieżącej, oraz informacji na temat tego, czy otrzymuje ona jakąkolwiek pomoc państwa. Na przykład, w jaki sposób HCz finansuje swoje dostawy energii i jakie są warunki udzielania gwarancji na rzecz HSCz za długi wobec PSE.
  - Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące postępowania układowego, włącznie z informacją o decyzjach dotyczących jego otwarcia i zamknięcia.
  - Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące decyzji rządu w sprawie zobowiązania ustanowionego w punkcie 5.4 KPR w sprawie przeprowadzenia postępowania upadłościowego HCz oraz informacje o tym, kiedy dokładnie została ona podjęta.

<sup>(46)</sup> Opinia Rzecznika Generalnego w Sprawie C-276/02 Hiszpania v Komisja, paragraf 40.

<sup>(47)</sup> Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 8.

<sup>(48)</sup> W rzeczywistości pierwszy plan wydaje się sugerować, że Operator, który zajmuje się administracją roszczeń państwowych jako firma nieprodukująca stali, umarza długi. Rola Operatora zaczyna się jednak dopiero po dokonaniu restrukturyzacji długów.

<sup>(49)</sup> Miałyby to również zastosowanie w przypadku braku Protokołu nr 8, ponieważ punkt 1 Komunikatu Komisji w sprawie pomocy doraźnej i na restrukturyzację oraz pomocy na zamknięcie działalności w sektorze stalowym (Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 8) stwierdza, że pomoc na cele restrukturyzacji w sektorze hutnictwa stali jest niezgodna ze wspólnym rynkiem.

<sup>(50)</sup> Patrz: decyzja Komisji PHS/LNM z dnia 5 lutego 2004 r., COMP/M 3326; PHS jest beneficjentem w rozumieniu Protokołu nr 8, ponieważ znajduje się na liście w załączniku 1.

- Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego oraz Ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy z października 2002 r. W szczególności, wyjaśnienia dotyczące różnic w skutkach prawnych, które dotychczas nie zostały wspomniane, pomiędzy restrukturyzacją a upadłością przeprowadzoną zgodnie z prawem upadłościowym. Ponadto, wymagana jest szczegółowa lista wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na restrukturyzację, i tych, którzy jej nie wyrazili, szczególnie w celu umożliwienia ustalenia, czy banki, takie jak Kredyt Bank SA, które w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego uzyskałyby wyższą spłatę, wyraziły zgodę, a jeżeli tak, to dlaczego.
  - Wyjaśnienie dotyczące wszelkich głównych wierzytelności oraz ich rozwoju po otwarciu postępowania układowego. Potwierdzenie, że długi narosłe po 30 czerwca 2002 r. nie zostaną objęte restrukturyzacją. Ponadto niezbędne jest wyjaśnienie dotyczące sposobu naliczania odsetek od wierzytelności oraz czy w skład zobowiązań przedstawionych w załączniku do drugiego planu wchodzi odsetki dla wierzycieli prywatnych oraz (komercyjnych) wierzycieli publicznych.
  - Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące zabezpieczeń ze wskazaniem wierzytelności, których składników majątku one dotyczą.
  - Wyjaśnienie dotyczące sprzedaży HCz, w szczególności ceny, którą płaci LNM, w jaki sposób został zorganizowany przetarg i jakie były najważniejsze wymagania stanowiące o wyborze oferenta. Ponadto, jakie są gwarancje, że, jeżeli LNM zakupi HCz, nie zostanie przekazana żadna pomoc państwa na rzecz HCz z PHS.
  - Wyjaśnienie, dlaczego aktywa przekazane Operatorowi oraz aktywa pozostające w Regionalnym Funduszu Inwestycyjnym SA są warte 203 mln / 159 mln PLN.
52. Komisja zwraca się do Polski z prośbą o natychmiastowe przekazanie kopii niniejszego listu potencjalnemu odbiorcy pomocy.
  53. Komisja pragnie przypomnieć Polsce, że art. 88 ust. 3 Traktatu WE ma skutek zawieszający i zwraca uwagę na art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, który stanowi, że wszelka pomoc udzielona beneficjentowi bezprawnie może zostać rewindykowana.
  54. Komisja poinformuje zainteresowane strony, publikując niniejsze pismo oraz jego znaczące streszczenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poinformuje również zainteresowane strony w krajach EFTA, będące sygnatariuszami Porozumienia EOG, publikując zawiadomienie w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, oraz poinformuje Urząd Nadzoru EFTA, przesyłając kopię niniejszego pisma. Wszystkie zainteresowane strony zostaną zaproszone do przedkładania swoich uwag w terminie jednego miesiąca od dnia takiej publikacji.».
-

**Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/9/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas**

(2004/C 204/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

*(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la Directiva)*

Organismo europeo de normalización <sup>(1)</sup>	Referencia y título de la norma	Documento de referencia	Referencia de la norma retirada y sustituida	Fecha límite para obtener presunción de conformidad respecto a la norma sustituida Nota 1
CEN	EN 1127-1:1997 Atmósfera explosivas — Prevención y protección contra explosiones — Parte 1: Conceptos básicos y metodología		Ninguna	
CEN	EN 1127-2:2002 Atmósferas explosivas — Prevención y protección contra la explosión — Parte 2: Conceptos básicos y metodología para minería		Ninguna	
CEN	EN 1755:2000 Seguridad de las carretillas Industriales — Funcionamiento en atmósferas con riesgo de explosión — Utilización en ambientes con gases, nubes de vapor o polvos inflamables		Ninguna	
CEN	EN 1834-1:2000 Motores alternativos de combustión interna — Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de motores funcionando en atmósfera potencialmente explosiva — Parte 1: Motores del grupo II utilizados en atmósferas de gas y de vapores inflamables		Ninguna	
CEN	EN 1834-2:2000 Motores alternativos de combustión interna — Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de motores funcionando en atmósfera explosiva — Parte 2: Motores del grupo I utilizados en trabajos subterráneos con atmósferas con grisú con o sin polvos inflamables		Ninguna	
CEN	EN 1834-3:2000 Motores alternativos de combustión interna — Requisitos de seguridad para el diseño y fabricación de motores utilizados en atmósferas potencialmente explosivas — Parte 3: Grupo II de motores para su utilización en atmósferas de polvos inflamables.		Ninguna	
CEN	EN 1839:2003 Determinación de los límites de explosividad de gases y vapores		Ninguna	
CEN	EN 12874:2001 Apagallamas — Requisitos de funcionamiento, métodos de ensayo y límites de utilización		Ninguna	

Organismo europeo de normalización (1)	Referencia y título de la norma	Documento de referencia	Referencia de la norma retirada y sustituida	Fecha límite para obtener presunción de conformidad respecto a la norma sustituida Nota 1
CEN	EN 13012:2001 Estaciones de suministro de combustible — Especificación para la construcción y funcionamiento de las toberas automáticas que se utilizan como distribuidores de combustible		Ninguna	
CEN	EN 13160-1:2003 Sistemas de detección de fugas — Parte 1: Principios generales		Ninguna	
CEN	EN 13237:2003 Atmósferas potencialmente explosivas — Términos y definiciones para equipos y sistemas de protección destinados a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas		Ninguna	
CEN	EN 13463-1:2001 Material no eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Parte 1: Método básico y requisitos		Ninguna	
CEN	EN 13463-5:2003 Material no eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Parte 5: Protección mediante seguridad constructiva		Ninguna	
CEN	EN 13463-8:2003 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas — Parte 8: Protección por inmersión en líquido «k»		Ninguna	
CEN	EN 13673-1:2003 Determinación de la presión máxima de explosión y de la velocidad máxima de aumento de presión en gases y vapores — Parte 1: Determinación de la presión máxima de explosión		Ninguna	
CEN	EN 13760:2003 Sistemas de llenado de GLP para vehículos ligeros y pesados — Boquillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones		Ninguna	
CEN	EN 13821:2002 Atmósferas potencialmente explosivas — Prevención y protección contra la explosión — Determinación de la energía mínima de inflamación de las mezclas polvo/aire		Ninguna	
CEN	EN 13980:2002 Atmósferas potencialmente explosivas — Aplicación de sistemas de calidad		Ninguna	



Organismo europeo de normalización (1)	Referencia y título de la norma	Documento de referencia	Referencia de la norma retirada y sustituida	Fecha límite para obtener presunción de conformidad respecto a la norma sustituida Nota 1
Cenelec	EN 50014:1997 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Requisitos generales.		Ninguna	—
	Modificación A1:1999 a la EN 50014:1997		Nota 3	—
	Modificación A2:1999 a la EN 50014:1997		Nota 3	—
Cenelec	EN 50015:1998 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Inmersión en aceite «o»		Ninguna	—
Cenelec	EN 50017:1998 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Relleno pulverulento «q»		Ninguna	—
Cenelec	EN 50018:2000 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Envoltorio antideflagrante «d»		Ninguna	—
	Modificación A1:2002 a la EN 50018:2000		Nota 3	Fecha de vencimiento (30.6.2003)
Cenelec	EN 50019:2000 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Seguridad aumentada «e» + Corrigendum 4.2003		Ninguna	—
Cenelec	EN 50020:2002 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas — Seguridad intrínseca «i»		Ninguna	—
Cenelec	EN 50021:1999 Aparatos eléctricos para atmósferas potencialmente explosivas — Tipo de protección «n»		Ninguna	—
Cenelec	EN 50104:1998 Aparatos eléctricos de detección y medida de oxígeno — Reglas funcionales y métodos de ensayo		Ninguna	—
Cenelec	EN 50104:2002 Aparatos eléctricos para la detección y medida de oxígeno — Reglas funcionales y métodos de ensayo		EN 50104:1998 Nota 2.1	1.2.2005
	Modificación A1:2004 a la EN 50104:2002		Nota 3	1.8.2004
Cenelec	EN 50241-1:1999 Especificación para aparatos de camino óptico abierto para la detección de gases y vapores — Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo		Ninguna	—
	Modificación A1:2004 a la EN 50241-1:1999		Nota 3	1.8.2004

Organismo europeo de normalización (1)	Referencia y título de la norma	Documento de referencia	Referencia de la norma retirada y sustituida	Fecha límite para obtener presunción de conformidad respecto a la norma sustituida Nota 1
Cenelec	EN 50241-2:1999 Especificación para aparatos de camino óptico abierto para la detección de gases y vapores — Parte 2: Reglas funcionales para aparatos de detección de gases combustibles		Ninguna	—
Cenelec	EN 50281-1-1:1998 Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvo combustible — Parte 1-1: Aparatos eléctricos protegidos con envolventes — Construcción y ensayos + Corrigendum 8.1999  Modificación A1:2002 a la EN 50281-1-1:1998		Ninguna  Nota 3	—  1.12.2004
Cenelec	EN 50281-1-2:1998 Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvo combustible — Parte 1-2: Aparatos eléctricos protegidos con envolventes — Selección, instalación y mantenimiento. + Corrigendum 12.1999  Modificación A1:2002 a la EN 50281-1-2:1998		Ninguna  Nota 3	—  1.12.2004
Cenelec	EN 50281-2-1:1998 Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvo combustible — Parte 2: Métodos de ensayo — Métodos para la determinación de la temperatura mínima de ignición del polvo		Ninguna	—
Cenelec	EN 50284:1999 Requisitos especiales para la construcción, el ensayo y el marcado de aparatos eléctricos de equipos del grupo II, categoría 1G		Ninguna	—
Cenelec	EN 50303:2000 Equipos del grupo I, categoría M1 destinados a permanecer en funcionamiento en atmósferas con peligro de grisú y/o polvo de carbón		Ninguna	—
Cenelec	EN 60079-7:2003 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas — Parte 7: Seguridad aumentada «e»	IEC 60079-7:2001	EN 50019:2000 Nota 2.1	1.7.2006
Cenelec	EN 60079-15:2003 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas — Parte 15: Modo de protección «n»	IEC 60079-15:2001 (modificada)	EN 50021:1999 Nota 2.1	1.7.2006

Organismo europeo de normalización <sup>(1)</sup>	Referencia y título de la norma	Documento de referencia	Referencia de la norma retirada y sustituida	Fecha límite para obtener presunción de conformidad respecto a la norma sustituida Nota 1
Cenelec	EN 61779-1:2000 Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables — Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.  Modificación A11:2004 a la EN 61779-1:2000	IEC 61779-1:1998 (modificada)	EN 50054:1998 Nota 2.1  Nota 3	Fecha de vencimiento (30.6.2003)  1.8.2004
Cenelec	EN 61779-2:2000 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases inflamables — Parte 2: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del grupo I, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta un 5 % de metano en aire	IEC 61779-2:1998 (modificada)	EN 50055:1998 Nota 2.1	Fecha de vencimiento (30.6.2003)
Cenelec	EN 61779-3:2000 Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables — Parte 3: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del grupo I, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta un 100 % de metano en aire	IEC 61779-3:1998 (modificada)	EN 50056:1998 Nota 2.1	Fecha de vencimiento (30.6.2003)
Cenelec	EN 61779-4:2000 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases inflamables — Parte 4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del grupo II, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta el 100 % del límite inferior de explosividad.	IEC 61779-4:1998 (modificada)	EN 50057:1998 Nota 2.1	Fecha de vencimiento (30.6.2003)
Cenelec	EN 61779-5:2000 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases inflamables — Parte 5: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del grupo II, pudiendo indicar una fracción volumétrica de hasta el 100 % de gas	IEC 61779-5:1998 (modificada)	EN 50058:1998 Nota 2.1	Fecha de vencimiento (30.6.2003)
Cenelec	EN 62013-1:2002 Lámparas de casco para utilización en minas con riesgo de grisú — Parte 1: Requisitos generales — Construcción y ensayo en relación al riesgo de explosión	IEC 62013-1:1999 (modificada)	Ninguna	—

<sup>(1)</sup> CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.  
Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles/Brussel, tel. (32-2) 519 68 71, fax. (32-2) 519 69 19.  
ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 492 94 42 12, fax (33) 493 65 47 16.

**Nota 1:** Generalmente la fecha límite para obtener presunción de conformidad será la fecha límite de retirada (dow), fijada por el organismo europeo de normalización, pero debe llamarse la atención del usuario sobre el hecho de que, en ciertos casos excepcionales, puede ser diferente.

**Nota 2.1:** La nueva norma (o modificada) tiene el mismo campo de aplicación que la norma sustituida. En la fecha declarada la norma sustituida deja de dar presunción de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva.

Nota 3: En caso de modificaciones, la norma referenciada es la norma EN CCCC:YYYY, sus modificaciones previas, si las hubiera, y esta nueva modificación; la norma retirada y sustituida (columna 4), por lo tanto, consiste en la norma EN CCCC:YYYY y sus modificaciones previas, si las hubiera, pero sin la nueva modificación

Ejemplo: Para la EN 50014:1997 se aplica lo siguiente:

Cenelec	<p>EN 50014:1997</p> <p>Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas - Reglas generales</p> <p>[La norma referenciada es EN 50014:1997]</p> <p>Modificación A1:1999 a la EN 50014:1997</p> <p>[La norma referenciada es EN 50014:1997 +A1:1999 a la EN 50014:1997]</p> <p>Modificación A2:1999 a la EN 50014:1997</p> <p>[La norma referenciada es EN 50014:1997 +A1:1999 a la EN 50014:1997 +A2:1999 a la EN 50014:1997]</p>		<p>Ninguna [No hay norma sustituida]</p> <p>Nota 3 [La norma sustituida es EN 50014:1997]</p> <p>Nota 3 [La norma sustituida es EN 50014:1997 +A1:1999 a la EN 50014:1997]</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
---------	---	--	--	----------------------------

Aviso:

- Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, de las cuales podrán encontrar una lista que figura en anexo de la Directiva 98/34/CEE del Consejo <sup>(1)</sup>, modificada por la Directiva 98/48/CE <sup>(2)</sup>.
- La publicación de las referencias en el DO no implica que las normas estén disponibles en todas las lenguas comunitarias.
- La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista.
- Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

<sup>(1)</sup> DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

<sup>(2)</sup> DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.